

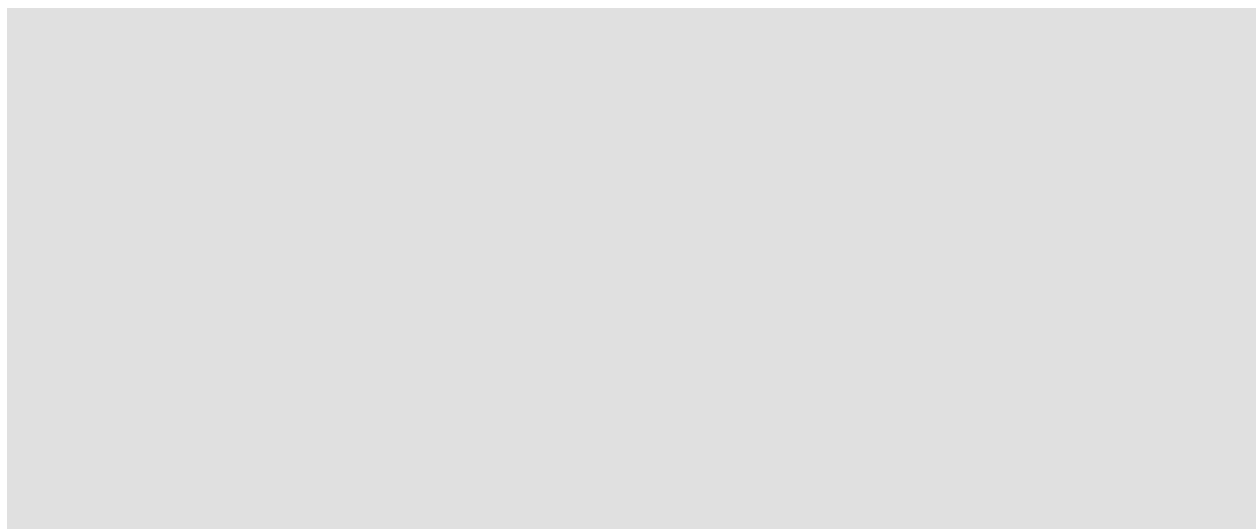
Reparaciones inversas: trampa perfecta de Zimbabwe, el peligro inminente de Sudáfrica

La reforma agraria no es una amenaza, sino una exigencia de justicia. La comunidad mundial debe tratarlo como tal.

Por **Elizabeth Mpofu**, **Raj Patel** y **Varsha Gandikota-Nellutla**

Publicado el 3 Abr 2025

Guarde los artículos para leerlos más tarde y cree su propia lista de lectura.



Una mujer descarga trigo de un tractor en una sala de almacenamiento en la granja Redwood el 11 de noviembre de 2022 en Ticehurst, Zimbabwe [KB Mpofu/Getty Images]

El 7 de febrero, la Casa Blanca recortó la ayuda a Sudáfrica, citando una amenaza inexistente para los agricultores blancos de la expropiación de tierras del gobierno. Para ver lo que podría haber más allá de la orden ejecutiva de Trump, Sudáfrica solo necesita mirar hacia el norte. La economía de Zimbabwe ha sido aplastada por las sanciones impuestas después de redistribuir las tierras agrícolas de la era colonial. Y a pesar de los esfuerzos por aplacar al establishment desarrollista, parece que Washington prefiere que el país cuelgue, como un cadáver en un patíbulo, no vaya a ser que otros países empiecen a tener ideas propias.

En julio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Zimbabwe acordó pagar 3.500 millones de dólares en compensación a aproximadamente 4.000 propietarios de tierras colonos blancos por la redistribución de propiedades durante las reformas agrarias. Esta suma, cinco veces el tamaño del plan de [estímulo COVID de Zimbabwe de mayo de 2020](#), se prometió en un momento en que las Naciones Unidas advirtieron que el país estaba "al borde de la hambruna provocada por el hombre". El acuerdo se produjo después de años de presión, con la esperanza de que los funcionarios de Zimbabwe persuadieran a Estados Unidos de levantar la Ley de Democracia y Recuperación Económica de Zimbabwe (ZDERA) de 2001 que ha bloqueado el acceso de la nación a préstamos y asistencia internacionales

durante dos décadas. Sin embargo, Zimbabwe carecía de fondos para pagar, y ZDERA se mantuvo.

La narrativa convencional describe la reforma agraria de Zimbabwe como una expropiación imprudente por parte del despótico Robert Mugabe, que conduce al colapso económico. Esta versión reescribe la historia. Durante la colonización británica, a los africanos se les prohibió poseer tierras fuera de las "reservas nativas". A mediados del siglo XX, 48.000 colonos blancos controlaban más de 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas de primera calidad, mientras que casi un millón de africanos estaban confinados a 20 millones de acres de tierra en gran parte infértil, una injusticia que alimentó la lucha de liberación de Zimbabwe.

El Acuerdo de Lancaster House de 1979, que puso fin al dominio de la minoría blanca, restringió la reforma agraria a las transacciones de mercado durante una década, asegurando que persistiera la propiedad de la tierra de la era colonial. A pesar de esta limitación, Zimbabwe avanzó en el desarrollo humano en el decenio de 1980. Pero a finales de la década, el Banco Mundial y el FMI impusieron un programa de ajuste estructural económico, recortando el gasto público, eliminando los subsidios y privatizando las empresas estatales. El resultado: desempleo masivo, servicios degradados y pobreza cada vez más profunda.

En el año 2000, ante la creciente presión interna, el gobierno de Mugabe comenzó la redistribución obligatoria de la tierra. El programa tenía deficiencias: apoyo insuficiente a los nuevos agricultores y recursos insuficientes para reconstruir las cadenas de suministro agrícola. Sin embargo, contrariamente a las narrativas del desastre, miles de zimbabuenses sin tierra se beneficiaron, mientras que una pequeña élite de colonos blancos perdió su estatus privilegiado.

La respuesta internacional fue rápida y punitiva. Cuando el Congreso de EE.UU. aprobó la ZDERA en diciembre de 2001, se presentó explícitamente como una respuesta al programa de reforma agraria de Zimbabwe, enmarcando las acciones de Zimbabwe como una amenaza para la política exterior de EE.UU. El Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Canadá siguieron con sus propias medidas punitivas. Durante dos décadas, Zimbabwe ha estado atrapado en un ciclo de aislamiento económico, incapaz de acceder a los préstamos y la inversión necesarios para reconstruirse.

El costo humano ha sido asombroso. Los expertos en derechos humanos de la ONU han advertido en repetidas ocasiones de que la ZDERA ha tenido un "efecto dominó insidioso" en la economía de Zimbabwe y en el disfrute de los derechos fundamentales. La Comunidad de Desarrollo de África Meridional estima que Zimbabwe ha perdido el acceso a más de 100.000 millones de dólares en apoyo internacional desde 2001.

El acuerdo de compensación de 2020 es una cruel ironía. Zimbabwe, que ya está en bancarota, ahora debe pedir prestados miles de millones de dólares para pagar a los antiguos beneficiarios coloniales, con la esperanza de escapar de una ley punitiva impuesta en respuesta a su programa de reforma agraria. Esto crea una trampa perfecta: una nación obligada a financiar su subyugación, mientras su pueblo sufre.

El absurdo se ve subrayado por la negativa de Estados Unidos a apoyar la reestructuración de la deuda de Zimbabue a través del Banco Africano de Desarrollo. Los funcionarios estadounidenses insisten en que la ZDERA es "una ley, no una sanción", pero esta es una distinción sin diferencia: ya sea a través de sanciones formales o legislación, el objetivo sigue siendo el mismo: proteger los derechos de propiedad de los colonos por encima de la justicia para los colonizados.

Esta no es solo la historia de Zimbabue. La administración Trump atacó recientemente los esfuerzos mucho más cautelosos de reforma agraria de Sudáfrica, afirmando falsamente que el gobierno estaba "confiscando tierras de los agricultores blancos". Esta retórica, amplificada por los medios de comunicación de extrema derecha, ignora que la reforma agraria de Sudáfrica -un proceso establecido por la Constitución- busca corregir el despojo de la era del apartheid, donde los sudafricanos blancos, el 8 por ciento de la población, controlan el 72 por ciento de las tierras agrícolas.

La intervención de Trump nunca tuvo que ver con los derechos de propiedad, sino con la preservación de un sistema global que favorece a los antiguos colonizadores sobre los desposeídos. La lucha por la justicia territorial en Zimbabue, Sudáfrica y en todo el Sur Global no es solo una lucha local, es una lucha global.

Como dijo una vez Thomas Sankara, el líder revolucionario de Burkina Faso, la deuda es "una reconquista de África hábilmente gestionada". La difícil situación de Zimbabue es un duro recordatorio de esta verdad. La comunidad internacional debe tener en cuenta el legado del colonialismo y los sistemas que lo siguen aplicando. Hasta que lo hagamos, la promesa de liberación seguirá estando fuera del alcance de millones de personas.

La reforma agraria de Zimbabue no es perfecta, pero es necesaria. La tragedia no es la reforma en sí, sino la reacción global que castiga a Zimbabue por atreverse a desafiar el statu quo. Es hora de levantar las sanciones, cancelar las deudas y permitir que Zimbabue, Sudáfrica y otras naciones busquen justicia en sus propios términos. La reforma agraria no es una amenaza, es una demanda de justicia, una demanda que el mundo ya no puede ignorar.

Las opiniones expresadas en este artículo son propias de los autores y no reflejan necesariamente la postura editorial de Al Jazeera.

Reverse reparations: Zimbabwe's perfect trap, South Africa's looming danger

Land reform is not a threat, but a demand for justice. The global community must treat it as such.

By **Elizabeth Mpofu, Raj Patel and Varsha Gandikota-Nellutla**

Published On: 3 Apr 2025 3 Apr 2025

Save articles to read later and create your own reading list.



A woman offloads wheat from a tractor into a storage room at Redwood farm on November 11, 2022 in Ticehurst, Zimbabwe [KB Mpofu/Getty Images]

On February 7, the White House cut aid to South Africa, citing a nonexistent threat to white farmers from government land expropriation. To see what might lie beyond Trump's executive order, South Africa need only look north. Zimbabwe's economy has been crushed by sanctions imposed after redistributing colonial-era farmland. And despite efforts to placate the development establishment, it appears that Washington prefers the country to dangle, like a corpse in a gibbet, lest other countries start getting ideas of their own.

In July 2020, in the teeth of the COVID-19 pandemic, Zimbabwe agreed to pay \$3.5bn in compensation to approximately 4,000 white settler landowners for property redistributed during land reforms. This sum, five times the size of Zimbabwe's [May 2020 COVID stimulus plan](#), was pledged at a time when the United Nations warned the country was "on the brink of man-made starvation". The deal came after years of pressure, with Zimbabwean officials hoping it would persuade the United States to lift the punitive 2001 Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (ZDERA) that has blocked the nation's access to international loans and assistance for two decades. Yet Zimbabwe lacked the funds to pay, and ZDERA remained.

The conventional narrative portrays Zimbabwe's land reform as reckless expropriation by the despotic Robert Mugabe, leading to economic collapse. This version rewrites history. During British colonisation, Africans were prohibited from owning land outside "native reserves". By the mid-20th century, 48,000 white settlers controlled 50 million acres (more than 20 million hectares) of prime farmland, while nearly a million Africans were confined to 20 million acres of largely infertile land – an injustice that fuelled Zimbabwe's liberation struggle.

The 1979 Lancaster House Agreement, which ended white minority rule, restricted land reform to market transactions for a decade, ensuring colonial-era land ownership persisted. Despite this constraint, Zimbabwe made strides in human development in the 1980s. But by the end of the decade, the World Bank and the IMF imposed an economic structural

adjustment programme, slashing public spending, removing subsidies, and privatising state enterprises. The result: mass unemployment, degraded services, and deepening poverty.

By 2000, facing growing domestic pressure, Mugabe's government began compulsory land redistribution. The programme had flaws – inadequate support for new farmers and insufficient resources to rebuild agricultural supply chains. Yet, contrary to disaster narratives, thousands of landless Zimbabweans benefitted while a small elite of white settlers lost their privileged status.

The international response was swift and punitive. When the US Congress passed ZDERA in December 2001, it was explicitly presented as a response to Zimbabwe's land reform programme, framing Zimbabwe's actions as a threat to US foreign policy. The United Kingdom, the European Union, Australia, and Canada followed with their own punitive measures. For two decades, Zimbabwe has been trapped in a cycle of economic isolation, unable to access the loans and investment needed to rebuild.

The human cost has been staggering. UN human rights experts have repeatedly warned that ZDERA has had an "insidious ripple effect" on Zimbabwe's economy and the enjoyment of fundamental rights. The Southern African Development Community estimates that Zimbabwe has lost access to more than \$100bn in international support since 2001.

The 2020 compensation deal is a cruel irony. Zimbabwe, already bankrupt, must now borrow billions to pay former colonial beneficiaries, hoping to escape a punitive law imposed in response to its land reform programme. This creates a perfect trap: a nation forced to finance its subjugation, while its people suffer.

The absurdity is underscored by the US's refusal to support Zimbabwe's debt restructuring through the African Development Bank. US officials insist that ZDERA is "a law, not a sanction", but this is a distinction without a difference – whether through formal sanctions or legislation, the goal remains the same: protecting settler property rights over justice for the colonised.

This is not just Zimbabwe's story. The Trump administration recently attacked South Africa's far more cautious land reform efforts, falsely claiming the government was "seizing land from white farmers". This rhetoric, amplified by far-right media, ignores that South Africa's land reform – a constitutionally mandated process – seeks to correct apartheid-era dispossession, where white South Africans, 8 percent of the population, control 72 percent of farmland.

Trump's intervention was never about property rights – it was about preserving a global system that favours former colonisers over the dispossessed. The fight for land justice in Zimbabwe, South Africa, and across the Global South is not just a local struggle – it is a global one.

As Thomas Sankara, the revolutionary leader of Burkina Faso, once said, debt is "a cleverly managed reconquest of Africa". Zimbabwe's plight is a stark reminder of this truth. The international community must reckon with the legacy of colonialism and the systems that

continue to enforce it. Until we do, the promise of liberation will remain out of reach for millions.

Zimbabwe's land reform was not perfect, but it was necessary. The tragedy is not the reform itself but the global backlash punishing Zimbabwe for daring to challenge the status quo. It is time to lift the sanctions, cancel the debts, and allow Zimbabwe, South Africa, and other nations to pursue justice on their own terms. Land reform is not a threat – it is a demand for justice, one the world can no longer ignore.

The views expressed in this article are the authors' own and do not necessarily reflect Al Jazeera's editorial stance.